



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIÓN JURÍDICA

Honorable

**TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

Magistrado Ponente: DR. GUILLERMO POVEDA PERDOMO

Calle 12 N°5-75, Edificio Centro Comercial Plaza Caicedo, Piso 5.

Ciudad.

Ref. **PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACION  
INTERPUESTO POR EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**

PROCESO: **76-001-23-31-000-2016-0060900**

DEMANDANTES: **ANA LUCIA ARGOTE Y OTROS.**

DEMANDADO: **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**

MEDIO DE CONTROL: **REPARACIÓN DIRECTA**

**GLORIA AMPARO PEREZ PAZ**, mayor de edad y vecina de Santiago de Cali, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° **31.853.521** expedida en Cali (Valle), abogada titulada y en ejercicio, con Tarjeta Profesional N°**62.510** expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre y representación del Municipio de Santiago de Cali conforme con el **PODER ESPECIAL** conferido por el Municipio de Santiago de Cali y con personería reconocida en el presente proceso, dentro del término legal, con todo respeto y de conformidad al artículo 671 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, presento ante su despacho memorial **PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI CALI**, dentro del proceso señalado en la referencia, en los siguientes términos:

Liminarmente, reitero lo términos de expuestos en el recurso de apelación, por cuanto, el diseño metodológico de la réplica se expuso refutando los acápites pertinentes de la sentencia, para luego concluir con las razones de inconformidad con la decisión adoptada, concretamente los aspectos motivacionales de la misma y el reproche de la valoración probatoria realizada por el Juez de primera instancia, lo cual constituye el núcleo esencial de la alzada.

La motivación de la sentencia, como lo explica Pinzón Muñoz, *sin ser una muestra fiel del proceso intelectual empleado por el juez, es en esencia la única posibilidad que tienen las partes para corregir la racionalidad que debe presentar la sentencia*. Y complementa el autor, *"Ahora, ya se esbozó que la argumentación*

*dentro de una sentencia judicial no puede ser estrictamente jurídica, en la medida en que siempre deberá partir de la valoración de los hechos, que justamente son los que se interpretan a través del prisma normativo para lograr una decisión justa y racional. Adicionalmente, en la motivación deben quedar expuestas las premisas que llevaron al juez al convencimiento sobre los hechos relevantes debatidos, que es justamente lo que permite el control sobre la valoración probatoria.*

*Si la motivación sobre los hechos consiste en la explicación de las razones por las cuales se logró la convicción, lo que implica determinar claramente la eficacia atribuida a cada medio probatorio y su interpretación particular y, al mismo tiempo, universal dentro del proceso, es obvio que ese razonamiento es la vía a través de la cual se surte la contradicción y, especialmente, se evita la arbitrariedad judicial.”<sup>1</sup>*

Lo expresado por la doctrina citada pretende sensibilizar al *ad quem*, para que en la juiciosa revisión de las premisas que llevaron al Juzgado al convencimiento de la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado Municipal, determine si en realidad existe algún grado de eficacia en cada medio probatorio examinado por el *a quo*, o si por el contrario, el análisis racional y razonable de las probanzas arrimadas al proceso permite sustentar una decisión en contrario.

**CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE  
SANTIAGO DE CALI Y PETICIÓN DE PRUEBAS**

En la Sentencia 154 del 14 de Octubre de 2021 se realiza, no solo un brevísimo recuento de los aspectos generales que el Juzgado consideró más relevantes, sino que de paso se cercenaron algunos, que a mi juicio, constituyen material probatorio valioso y necesario para que el juez pudiera hacer mejor su tarea, los cuales al carecer de análisis no tuvieron la oportunidad de ser valorados por este al momento de fallar.

En efecto, la sentencia solo enuncia de manera lacónica que la contestación de Municipio se contrajo a manifestar que no existe prueba del nexo causal entre la ocurrencia del accidente y que la información consignada en el

---

<sup>1</sup> PINZÓN MUÑOZ, Carlos Enrique. *La prueba de la responsabilidad extracontractual del Estado*, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2015, página 36.



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIÓN JURÍDICA

Informe Policial de Accidentes de Tránsito (*en adelante IPAT*) fue elaborado con base en la información suministrada por una de los agentes de tránsito, sin advertir si la víctima conducía bajo los efectos del alcohol y que el placa de cemento se encontraba al borde de la vía. Cuando de acuerdo con el registro fotográfico (FARO) aportado por las autoridades lo que se traduce en la inexistencia de falla en el servicio.

No obstante admitir que no era de esperarse que el Juzgado en este acápite transcribiera totalmente el escrito de la contestación de la demanda, este apoderado considera que faltó mencionar y analizar con detenimiento aspectos que constituyen parte esencial del contradictorio en el debate probatorio propuesto en defensa de los intereses del Municipio demandado y que fueron olvidados o en el mejor de los casos, desestimados sin argumento alguno por el *a quo*. Veamos:

**El Informe Policial de Accidente de Tránsito correspondiente, el Informe Pericial de Necropsia No. 2016010176001000082, y la Inspección técnica al cadáver radicada con el número de caso**

Poco o nada se dijo de la valoración de la prueba aportada con la contestación de la demanda<sup>2</sup>, relacionada en el segundo punto del acápite de pruebas documentales *–las cuales fueron admitidas por el Juzgado de la contestación de la demanda*. Se trata del **Oficio del IPAT y sus anexos** realizado por el Grupo de Criminalística de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.

En el expediental se arrió el registro civil de defunción del señor Hersy Rodrigo Chavez Argote, el cual da cuenta de que falleció en la fecha antes señalada a las 2:40 a.m. y que la inscripción del deceso se produjo por orden de la Fiscalía General de la Nación, a partir del acta de levantamiento de cadáver. En ese sentido reposa también en el expediente, con destino a este proceso y para fines probatorios en calidad de prueba documental que hace parte integral de los antecedentes administrativos que se allegaron al plenario. **Entre otros, el Informe Policial de Accidente de Tránsito correspondiente, el Informe Pericial de Necropsia No. 2016010176001000082, y la Inspección técnica al cadáver radicada con el número de caso. Es necesario manifestar que esta prueba fue solicitada de oficio ante el Despacho y admitida, sin embargo no fue**

<sup>2</sup> Visible a folio 143 del cuaderno.

**allegada completa, lo cual es considerada de vital importancia para establecer la conducta del occiso señor Chavez Argote el día de los hechos.**

Así las cosas, dicha evidencia permite ver la forma correcta de usar la estructura vial, por lo que no queda duda que existe culpa exclusiva de la víctima, pues su forma de conducir antes del accidente admite deducir que su comportamiento vial no era el correcto y que finalmente se accidentaría en ese sitio de morfología curva, el cual no pudo superar tal vez debido a la ingesta de alcohol que tenía en su cuerpo y de la cual **medicina legal tomó una muestra cuyos resultados se extrañan en este proceso, a pasar de haberse pedido, por parte de esta apoderada, como prueba necesaria para establecer la responsabilidad en el suceso, razón por la cual se depreca al juez ad quem la obtenga en sede de alzada.**

Así las cosas, procedo a reiterar las circunstancias de modo tiempo y lugar que se advierten del skanner 3d que aparece en el expedienta allegado por el grupo de criminalística de la secretaria de Movilidad de Santiago de Cali, a efectos de la valoración de la **prueba de arrastre** y que el a quo no estimo.

El **Informe Pericial de Necropsia No. 2016010176001000082, y la Inspección técnica al cadáver** hacen parte inescindible de las pruebas documentales recaudadas por la Policía Judicial de Tránsito que **debieron ser valoradas** junto con el REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL LUGAR DE LOS HECHOS realizado por el mismo agente de tránsito de quien en vida respondía al nombre de Hersey Rodrigo , luego **el examen de estas probanzas y su debida valoración se debió incluir en la Sentencia que se impugna**, en la medida que las fotografías del lugar de los hechos fueron tomadas por el skanner 3d y en ellas aparece una vía plana, iluminada, es decir, sin obstáculos, lo cual contrasta seriamente con la declaración del guarda de tránsito y que resultan ser la base probatoria principal que inspiró la condena a la entidad territorial.

### **GRÁFICA 1**

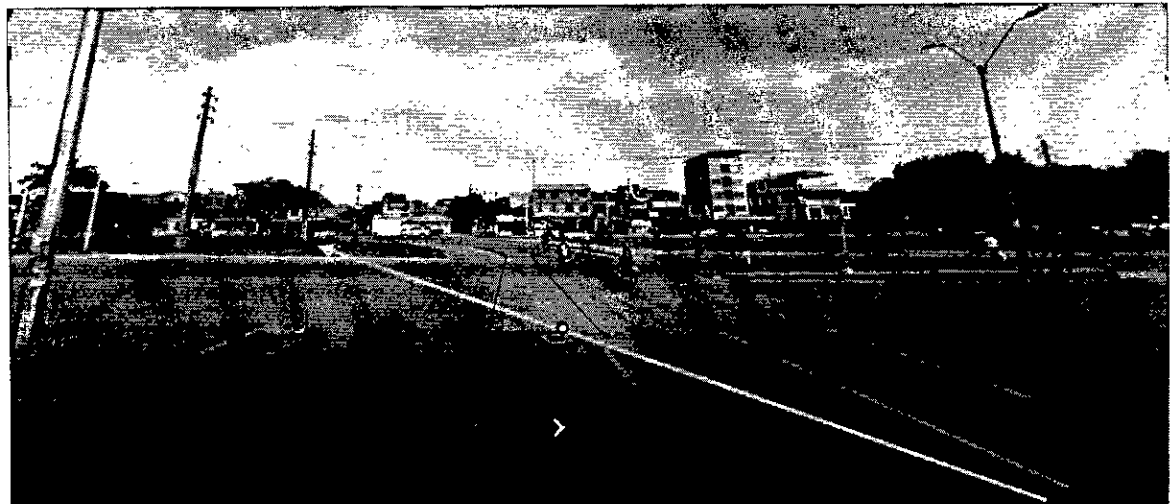


**GRÁFICA 2 :**



Esta gráfica 2 muestra desde otro ángulo de visión la alineación que tiene el separador ubicado entre la calzada del MIO y la de los vehículos particulares; y la flecha azul indica el curso normal que deben seguir los vehículos que transiten por la calzada de vehículos particulares.

**GRÁFICA 3**



En la **gráfica 3**, se aprecia una comparación de la trayectoria que llevaba la motocicleta (flecha verde) al llevar un curso en colisión contra los restos del separador (*en el punto blanco*) y continuar con hacia su destino final en la zona verde donde precisamente fue encontrado el cadáver en su posición después del accidente. Esta trayectoria se comprueba con tan solo unir el punto inicial con el punto final de las huellas de arrastre o “arañazo” (*que son evidencia irrefutable de trayectoria de la moto*) dejadas sobre la superficie del pavimento justo en la zona antibloqueo de la intersección vial, producto del rozamiento de las partes metálicas de la moto volcada y en arrastre después de colisionar con los restos del separador.

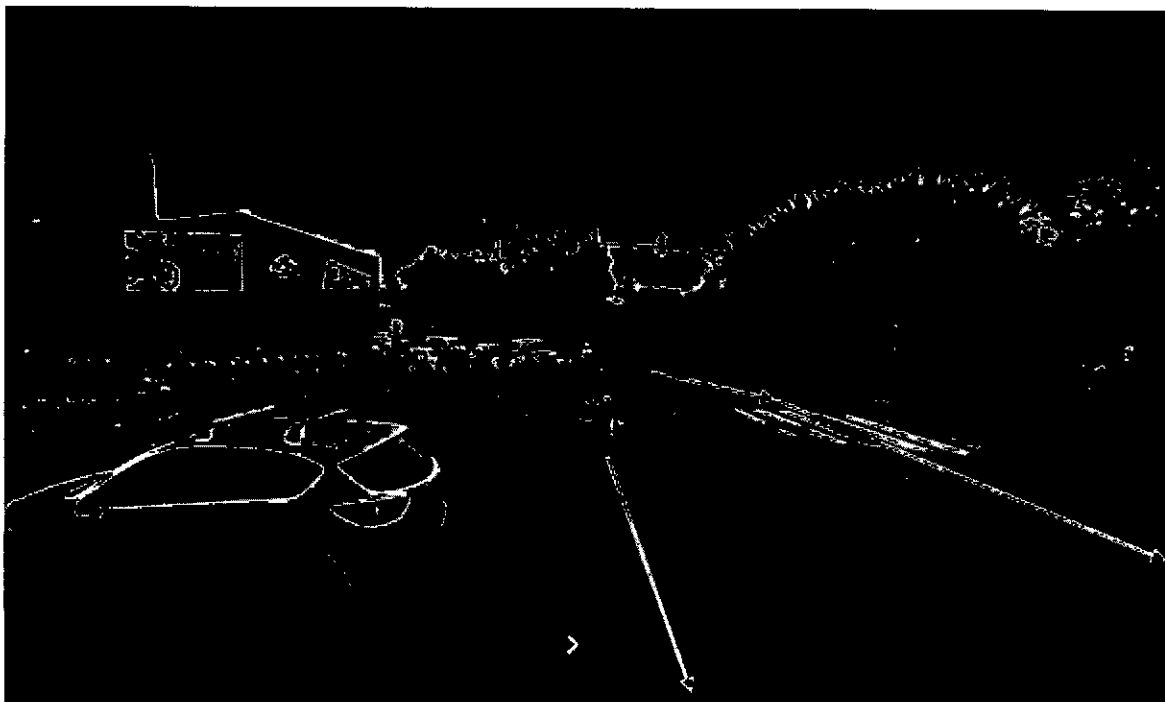
Esta es una evidencia irrefutable de la trayectoria irregular que traía el motociclista antes de colisionar con los restos del separador y seguir su trayectoria hasta la zona verde donde quedó el cadáver. De no haber chocado con los restos del separador, seguramente habría caído al caño de aguas residuales que hay después de la zona verde donde quedó el cadáver.

Así las cosas, dicha evidencia permite ver la forma correcta de usar la estructura vial, por lo que no queda duda que existe culpa exclusiva de la víctima, pues su forma de conducir antes del accidente admite deducir que su comportamiento vial no era el correcto y que finalmente se accidentaría en ese sitio de morfología curva, el cual no pudo superar tal vez debido a la ingesta de alcohol que tenía en su cuerpo y de la cual medicina legal tomó una muestra cuyos resultados se extrañan en este proceso, a pesar de haberse pedido, por parte de esta apoderada, como prueba necesaria para establecer la responsabilidad en el suceso, razón por la cual se deprecia al juez *ad quem* la obtenga en sede de alzada.

#### **GRÁFICA 4**



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIÓN JURÍDICA



En la **grafica 4** se aprecia la trayectoria correcta que por la que debe transitar un motociclista que venga por la carrera 15 y se disponga a atravesar la intersección con la Carrera 23. Obsérvese el espacio del separador de calzadas a su izquierda delimitado con líneas azules, dentro del cual existen algunos fragmentos del mismo y sobre el cual no es posible transitar en sano juicio, pues no se encuentra dentro de ninguna de las calzadas por donde transita el MIO y las otras calzadas por donde transitan los vehículos particulares.

En efecto, obra en el plenario, concretamente en la declaración del señor, también relacionada en la Sentencia que se ataca, que el citado servidor público se trasladó al sitio donde ocurrió el accidente y a pesar que el contenido de la Sentencia hace referencia a este elemento probatorio<sup>3</sup>, **increíblemente el juzgador colegiado no hace el análisis de rigor de las pruebas documentales contenidas en el registro fotográfico del lugar, frente a la declaración que rindió el mismo.** De haberlo hecho, habría encontrado una **protuberante contradicción con relación al estado de la vía, la placa de concreto y concretamente respecto de lo dicho “placa de cemento ilegal – que hace parte de la vía,** pues según se evidencia, en las gráficas 1, 2, 3 y 4 del sector del separador semidestruido existente entre la calzada del MIO y la de uso particular ubicado antes de la intersección, luego resulta una afirmación equivocada calificar esos fragmentos de separador, como **“PLACA DE CONCRETO (OBSTÁCULO ILEGAL NO SEÑALIZADO)** como indebidamente se menciona en el informe de policía judicial, pues es evidente que **no son placas dispuestas de manera ilegal,** sino que son fragmentos del separador sobre el cual está prohibido el tránsito sobre el mismo, y además se encuentran alineados con los demás separadores de la vía, por lo que **no es posible que algún vehículo los pueda pisar sin previamente salirse del curso normal que hace al transitar por el carril.**

El diseño del sitio es curvo como se corrobora en el plano de vista superior contenidos en el expediente, debido a la que la Carrera 15 hace su intersección

hacia el oriente con la Carrera 23 en forma diagonal. Según el informe de policía judicial de tránsito, en el momento del accidente el sitio estaba bien iluminado y demarcado como en efecto se aprecia en la gráfica (*es visible la zona amarilla de antibloqueo, la zona peatonal blanca, tanto de la calzada de uso exclusivo del MIO, como los dos carriles de uso particular*). La figura rectangular delimita -en color azul- el sector del separador semidestruido ubicado entre la calzada del MIO y la de uso particular antes de la intersección y las líneas rectas negras señalan la continuidad o conectan al separador semidestruido con el separador ubicado después de la intersección, mientras las flechas y líneas amarillas indican las trayectorias correctas por las que deben transitar normalmente los vehículos.

Luego dichas afirmaciones quedan sin fundamento a la luz del registro fotográfico en mención. Este aspecto asociado al evidente reparo en el testimonio que sirvieron de basamento de la condena, debió producir incredulidad en el juez de primera instancia, quien lejos de ello se afincó.

Allí no se puede ocultar, o pasar por alto, que existe una seria contradicción entre una prueba documental legalmente arrimada y admitida en el proceso y la dudosa declaración de un testigo, **lo cual no fue tenido en cuenta por el juzgador a quo** y que hace mucho daño a la verdad procesal, pues en este caso las probanzas documentales debieron tener asignado un mayor peso probatorio al momento de decidir en la medida que fueron aportadas como antecedentes administrativos al plenario y TAMBIÉN SON DOCUMENTOS PÚBLICOS pues fueron suscritos por el servidor público en ejercicio pleno de su competencia como agente de policía judicial de tránsito; sin embargo, como se pondrá en evidencia más adelante, ese carácter de documento público fue utilizado pero en contra del Municipio de Santiago de Cali como argumento para dar por cierto, y casi que de manera exclusiva, lo consignado parcialmente por el referido agente de tránsito **en un solo punto del IPAT** (*placa llamada ilegal*) sin realizar una VALORACIÓN INTEGRAL de TODA la actuación del funcionario, es decir, valorando las demás pruebas documentales aportadas por este al plenario.

Lo anterior debió ser objeto del más riguroso análisis por parte del Juzgado, dado que sobre dicho testimonio se afincaría la sentencia condenatoria a la Entidad Territorial. Ello por cuanto la jurisprudencia administrativa colombiana en materia de responsabilidad por accidentes de tránsito ocasionados por falla en el servicio de mantenimiento de las vías, ha señalado que el título de imputación es LA FALLA PROBADA, por lo que corresponde al demandante **DEMOSTRAR** la existencia del DAÑO, la FALLA DEL SERVICIO y el NEXO CAUSAL entre aquel y ésta, lo que permite IMPUTAR fáctica y jurídicamente la responsabilidad estatal.

Sobre la imperiosa necesidad de que el juez determine con exactitud y





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIÓN JURÍDICA

certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar desarrolladas en la ocurrencia de un accidente de tránsito, con el fin de poder desentrañar el fenómeno de la CAUSALIDAD ADECUADA sin el cual NO ES POSIBLE CONOCER EL ORIGEN DEL DAÑO QUE LE SIRVE DE SOPORTE FÁCTICO PARA HACER O NO LA IMPUTACIÓN DEL MISMO AL ESTADO, la jurisprudencia contenciosa administrativa ha sido profusa en reiterar que en aplicación del RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR FALLA PROBADA, el *onus probandi incumbit actori*, es decir, que la carga de la prueba está en cabeza del demandante, luego el juez debe reclamar previamente en el proceso tal exigencia al actor para poder comprobar si hay o no lugar a condenar, lo cual no ha sucedido en esta causa.

Lo que resulta especialmente curioso, es que en la Sentencia apelada, el Juez a pesar de hacer mención del fenómeno de la **causalidad adecuada** (*citando una sentencia del Consejo de Estado*) y su necesidad para fallar de acuerdo con ella, no se haya detenido en aplicarla al caso concreto, sobre la base de las probanzas arrojadas al proceso.

En efecto, el apoyo jurisprudencial que el Tribunal encontró para ilustrar este tópico es del siguiente tenor:

*"En primer lugar, vale la pena determinar que, si bien la causalidad y la imputación son dos categorías diferentes, por cuanto la primera hace alusión a las ciencias del ser, cuyo objeto es la naturaleza, y la segunda a las ciencias del deber ser, cuyo objeto es el derecho, -categorías que se traducen bajo la forma de juicios hipotéticos estableciendo una relación entre una condición y una consecuencia-, no debe olvidarse que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar -acción u omisión-. En este sentido, B. Mantilla Pineda expresó*

*"... Las leyes naturales son meramente descriptivas. Las normas son prescriptivas. Tal es la posición científica actual en el problema de distinción de ley natural y norma. En Kelsen la ley natural cae dentro del orden del ser, la naturaleza o realidad, y la norma dentro del orden del valor, el ideal o el deber ser".*

*Es decir, el dualismo entre la naturaleza como orden causal y la sociedad como*

orden normativo<sup>4</sup>, se rige por los principios específicos, en palabras de Kelsen, en uno y otro caso, se rigen por los principios de la necesidad (del ser) y el de la libertad (del deber ser)<sup>5</sup>, de tal suerte que aunque la causalidad material, difiere de la atribuibilidad material, por cuanto la primera pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación, y la segunda a una forma de conocimiento natural que busca una explicación de los fenómenos, es necesario recordar que cualquier tipo de análisis de imputación, parte de la base de un estudio en términos de atribuibilidad material, aspecto este que es necesario dilucidar, de conformidad con los elementos suasorios, en el asunto sub examine.<sup>6</sup> (Se resalta)

No obstante la línea jurisprudencial advertida en la sentencia, la misma carece de sustento en este sentido, es decir, en cuanto a la realización de un ESTUDIO SERIO EN TÉRMINOS DE ATRIBUIBILIDAD MATERIAL, aspecto este que como indicó el Consejo de Estado, es necesario dilucidar de conformidad con los elementos persuasivos arrimados al *sub iudice*, de los que precisamente hay que insistir en este memorial, que los mismos no tienen vocación orientada a demostrar el origen del daño, por lo que éste no es atribuible materialmente al municipio de Santiago de Cali, en la medida que ni de los testimonios, ni de los documentos obrantes en el expediente, se desprende certeza alguna de la forma como sucedió el evento dañoso lo que impide de facto la *imputatio facti* y la *imputatio iure* a la entidad demandada.

<p><b><u>INCORRECTA VALORACIÓN PROBATORIA DEL IPAT Y LA DECLARACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO</u></b></p>
--

Considera esta apoderada judicial este aspecto de fundamental importancia para la defensa de los intereses del Municipio de Santiago de Cali, razón por la cual sin consideraciones previas lo abordo, a efectos de hacer evidente al *ad quem* la imperiosa necesidad de su minuciosa revisión, pues con el acostumbrado respeto hacia la majestad del juez *a quo*, en el presente caso esa "libertad" que aplicó a la hora de apreciar el mérito probatorio en el *sub lite*, lo llevó al

<sup>4</sup> Kelsen – Cossio, *problemas escogidos de la teoría pura del derecho*. Buenos Aires. Editorial Guillermo Kraft Ltda. 1952. Pág. 12.

<sup>5</sup> Kant los asimila a mandatos de la razón que denomina imperativos. *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*, Editorial Ariel, Barcelona, Primera Edición, 1996, pág. 62

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección ", Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá D.C. veinticuatro (24) de Julio de dos mil trece (2013), Radicación: 19001-23-31-000-1998-00242-01 (26250).



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIÓN JURÍDICA

convencimiento equivocado de dar por cierto y probados, sin estarlo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos que dieron lugar a reclamar la cuantiosa indemnización, lo que generó la condena a mi representada sobre la base de presumir la responsabilidad estatal a partir del contenido meramente objetivo del informe policial de accidentes de tránsito (en adelante IPAT), soportado, según su vista, en la declaración del guarda de tránsito obrantes en el plenario, desestimando por completo tanto el IPAT, como la investigación de la fiscalía – archivado por delito culposos.

### **SOBRE LA PRUEBA DEL NEXO CAUSAL**

Para ilustrar este punto, en el que he hecho referencia a la necesidad de probar el **NEXO DE CAUSALIDAD** y su importancia como elemento estructurador de la responsabilidad estatal, con el mayor respeto hacia las instancias judiciales transcribiré un aparte del texto del profesor Carlos Enrique Pinzón Muñoz que recoge esta temática de manera didáctica, haciéndola de muy fácil comprensión y aplicación al caso que nos ocupa:

### **3. DE LA PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD Y DEL DAÑO ANTIJURÍDICO**

El tema del nexo de causalidad entre el hecho (acción u omisión), que se predica fue producido por la administración, y el daño antijurídico, no es un asunto sencillo, **ni se prueba de manera sumaria, ni mucho menos opera como una presunción** –se itera-, de ahí que deba distinguirse el verdadero significado del régimen de imputación aplicable a cada evento y, por supuesto, los presupuestos necesarios que involucren la carga de la prueba del demandante; y por otro lado, comprender en qué casos y frente a qué elementos está exento de prueba. (Resaltado propio)

Así las cosas, queda claro que **el actor debe probar en definitiva el nexo causal entre el hecho que se cuestiona fue el producto de la administración y el daño por el cual se reclama la reparación**, -se reitera-, carga probatoria que de ninguna manera encuentra variación dentro de la perceptiva contenida en la ley 1437 de 2011 (art. 306), que remite en lo que toca con las obligaciones probatorias, a la sistemática civil, esto es el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil vigente, y el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso-, que como se expuso previamente se encuentra vigente y es de obligatoria aplicación. (Resaltado propio)

Igualmente, partiendo de la hipótesis anterior, está claro que la exoneración de la responsabilidad que se endilga al Estado sólo se produce cuando se prueba la concurrencia de una causa extraña, entendida esta como fuerza mayor o **el hecho exclusivo** de la víctima o **de un tercero**<sup>142</sup>, de lo que se infiere lógicamente que **si el figurante no cumple con la prueba de los tres elementos fundantes** –el daño, la acción reprochada y **la conexión fáctica y jurídica**-, **no podrá declararse jurídicamente la prosperidad de su pretensión**; y de igual forma, existiendo prueba de ello, el Estado no podrá pretender exoneración si no prueba la causal de ausencia de responsabilidad, lo que se identifica con la carga de la prueba o *onus probandi*, que cada parte deberá afrontar en el proceso contencioso de reparación directa. (Resaltado propio)

Para corroborar la posición jurisprudencial sobre este tópico y concretamente sobre la exigencia probatoria a la que se alude, además de ser un buen compendio de argumento que se ha venido desarrollando, resulta pertinente transcribir el siguiente aparte jurisprudencial:

*“... Así las cosas, en el caso objeto de análisis, la sala encuentra que el elemento de **imputación fáctica** necesario para predicar en cabeza de la administración pública responsabilidad, **no se encuentra demostrado**, sin que para ello influya el régimen de imputación jurídica aplicable al supuesto de hecho, esto es, bien subjetivo (falla) u objetivo (riesgo excepcional, daño especial, etc.); lo anterior, como quiera que tanto en los regímenes objetivos como subjetivos es requisito sine qua non que **la parte actora demuestre plenamente la ocurrencia del daño antijurídico, así como el nexo que vincula ese perjuicio con la actuación de la administración**; la diferencia entre uno u otro régimen – subjetivo y objetivo- estriba, simplemente, en que en el segundo (objetivo) no juega el papel culpabilístico con que haya actuado la administración pública, es decir, no se torna en requisito indispensable la demostración de una falla en el servicio (culpa), para configurar la responsabilidad ...”<sup>143</sup> (Resaltado propio)*

Queda claro, en definitiva, que **es inexcusable la prueba de la relación causal**, la que no está amparada por ninguna presunción, tarea que se convierte en el centro de la discusión probatoria en cada caso en que aparece, de una parte la reclamación del particular, y, de otra, la presunta actuación lesiva de la administración, claro está, además de los presupuestos basilares en cada evento. (Resaltado propio)

En definitiva, **este diagnóstico debe ser completo y preciso**, por supuesto no a modo de un



concepto absoluto, sino considerando la posibilidad que ofrece cada caso; de otro lado, la fuente que da origen al proceso causal, debe estar definida en términos *específicos o individuales*, pues si se parte de un concepto general, jamás podría arribarse a la demostración de un curso causal individual. Sobre este particular, conviene citar en aparte, la opinión de la doctrina autorizada, véase: (Resaltado propio)

*“... La distinción entre las dos nociones de causalidad debería resultar suficientemente clara; a pesar de ello, es obviada a menudo por la doctrina y la jurisprudencia, viciando el discurso con una confusión conceptual bastante grave. **El problema es que de la existencia de una correlación causal general no puede derivarse la demostración de la existencia de un nexo de causalidad individual...**”<sup>144</sup> (Resaltado propio)*

En suma, el nexo causal no es un dato estadístico, tan poco un presupuesto valorativo y subjetivo de la parte actora; ni puede partir de una conjetura; y, mucho menos, puede ser presumido.”<sup>7</sup> (Resaltado propio)

Sobre la base de lo dicho y aportado como prueba en el plenario, se extraña este apoderado de cómo el honorable Juzgado, que seguramente conocen en profundidad tanto la jurisprudencia como la doctrina sobre cómo se demuestra la existencia del nexo causal, sustentan con tal simpleza la decisión de considerar probado, sin estarlo, el nexo causal entre la muerte del señor Hersey Rodrigo y la actividad de la Administración, escuetamente por considerar el IPAT un documento público del que se presume su autenticidad mientras no sea tachado de falso<sup>8</sup>, manifestando en la página siguiente que como constituye prueba documental cuya apreciación en cuanto a su contenido se rige por las reglas de la sana crítica y que en dicho informe se consignó el estado de la vía: “bueno, plano iluminado, seco”, ello, aunado al testimonio es suficiente para encontrar plenamente comprobado el nexo causal y la procedencia del reconocimiento indemnizatorio.

#### **LA INEXISTENCIA DE PRUEBA IDÓNEA SOBRE LA FALLA DEL SERVICIO**

No se detendrá este apoderado, en el presente escrito de impugnación, a mencionar o traer a colación las profusas referencias jurisprudenciales del

<sup>7</sup> PINZON MUÑOZ, Carlos Enrique, *EL PROCESAMIENTO DEL MEDIO DE CONTROL DE LA REPARACIÓN DIRECTA*, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá D.C., Colombia, 2014, Páginas 193 a 196.

<sup>8</sup> Ver la parte in fine del folio 251 de la sentencia.

Honorable Consejo de Estado, que como máximo tribunal de la justicia contenciosa administrativa, ha proferido respecto de la noción de falla del servicio como fuente de responsabilidad para ser aplicada SÓLO en aquellos casos en que efectivamente se ha demostrado que la falta de mantenimiento de la vías públicas ha generado o contribuido a causar accidentes de tránsito con resultados dañosos que generan perjuicios susceptibles de ser resarcidos, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. Básteme con decir en este acápite, que como ha quedado ampliamente reseñado, *up supra*, no hay en el plenario prueba idónea y efectiva que permita inferir con certeza la existencia de la placa en la vía el cual presuntamente generó el accidente, según los demandantes.

#### **LA PRUEBA DE EMBRIAGUEZ DE LA VÍCTIMA**

Este aparte si que genera perplejidad. Se pregunta la defensa del Municipio de Santiago de Cali, cómo es que existiendo prueba documental emanada de las entidades de salud<sup>9</sup> que atendieron a la víctima, las cuales registraron en las respectivas historias clínicas su estado de alicoramiento, el Juzgado desestime la valoración de esta prueba y no persiga su obtención, a pesar que fue decretada en su momento procesal oportuno, tras haberse observado que la experticia tomada al cadáver le hacen falta los folios 4 y 5 de esa regional.

Habiendo sido solicitada por esta apoderada con la contestación de la demanda y habiéndose decretado la práctica de esta prueba, no se explica cómo el Juzgado le restó importancia a la misma, cuando es obvio que las results de la misma tiene plena incidencia en la determinación del origen del hecho dañoso y posteriormente en la sentencia. En efecto, en la contestación de la demanda se observa en el acápite de pruebas pedidas lo siguiente:

*"LÍBRESE LOS SIGUIENTES OFICIOS:*

*Solicito respetuosamente al señor juez, oficiar al INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL con sede en Santiago de Cali, con el fin de que envíen con destino a este proceso LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ALCOHOLEMIA Y TOXICOLOGÍA que se le debió practicar al señor Hersey Rodrigo Chavez Argote por solicitud de policía judicial.*



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIÓN JURÍDICA

Resulta entonces claro que el *a quo* debió realizar la valoración de esta prueba documental dentro del contexto en que se presentaron los hechos.

## **TESIS DE LA DEFENSA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**

### **CONCLUSIÓN**

Luego de revisar el material probatorio recaudado en el curso del proceso que hoy nos ocupa, contrario a lo expuesto por el juzgador *a quo*, considera con todo respeto que **no se encuentran acreditados en este proceso todos los elementos que estructuran la responsabilidad estatal**, pues si bien se acreditó el daño en la persona de Hersey Rodrigo Chavez (q.e.p.d.), **no está demostrado el nexo causal o la relación de causalidad adecuada y directa entre el daño y la presunta falla en el servicio, así como tampoco se demostró la existencia de la falla en el servicio.**

## **LUGAR DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES, COMUNICACIONES**

### **PROCESALES y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA**

Las notificaciones personales y las comunicaciones procesales las recibiré en la oficina donde funcione el despacho judicial de conocimiento y en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal C.A.M., Piso 9, de la Torre Alcaldía ubicado en la Avenida 2<sup>N</sup> N°10-70 de Santiago de Cali.

Nuestra dirección electrónica es:

- Municipio de Santiago de Cali: [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co),
- Apoderado Judicial: [gap10\\_19@hotmail.com](mailto:gap10_19@hotmail.com) y [gloria.perez@cali.gov.co](mailto:gloria.perez@cali.gov.co)

De usted atentamente,

**GLORIA AMPARO PEREZ PAZ**

c.c. N°31.853.521 expedida en Santiago de Cali

Tarjeta Profesional de Abogada N°62.510 expedida por el C. S. de la J.